



GD-F-008 V.9

Página 1 de 13

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010025845 DEL 18/07/2014**

**"POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"**

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,**

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

**CONSIDERANDO:**

**I. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de LA VEGA, del departamento de CAUCA, es de categoría 6 y como prestador directo del servicio de aseo a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

**II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN**

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010010575, del 7 de abril de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de LA VEGA, departamento de CAUCA, por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013:

a) Reporte al SUI del Agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994 mediante:

1. Invitación pública dirigida a empresas de servicios públicos para que presenten ofertas para la prestación de los servicios públicos (numeral 6.1) y a otros municipios, al Departamento, a la Nación y otras personas públicas o privadas, para organizar empresa de servicios públicos (numeral 6.2).

2. Documento en que conste que se realizó la publicación de las invitaciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

3. Certificación en la que conste que no hubo empresas de servicios públicos o personas públicas o privadas interesadas en la prestación de los servicios ni en la organización de una empresa de servicios públicos en el municipio.

b) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema, y

c) Cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI.

## **2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010010575 del 7 de abril de 2014**

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010010575, del 7 de abril de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de LA VEGA, del departamento de CAUCA, mediante el oficio No. SSPD 20144010192421, del 7 de abril de 2014, enviado por correo certificado el 11 de abril de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución No. SSPD 20144010010575, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010213811. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. éste documento fue entregado el 29 de abril de 2014, en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, la señora MARLENY VALVERDE MOPAN, en su calidad de apoderada especial del alcalde del municipio de LA VEGA, del departamento de CAUCA, mediante documentos radicados en esta entidad bajo los números SSPD 20145290241172 y 20145290241362 del 13 de mayo de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010010575.

## **III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**

### **3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por la apoderada del alcalde del municipio de LA VEGA, del departamento de CAUCA, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, los escritos radicados con los Nos. SSPD 20145290241172 y 20145290241362, reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

### **3.2 Argumentos del recurrente**

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

#### **"LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

*Está claro que las entidades de vigilancia, pueden y deben imponer sanciones a las entidades vigiladas, cuando dan lugar a ellas, conforme los requisitos y procedimientos correspondientes.*

*No obstante, la imposición de esas sanciones jamás podrá estar totalmente alejada del deber de probar no solo el hecho material que da lugar a la imposición de las sanciones, sino también la responsabilidad de la entidad vigilada, como que no puede haber sanción por simple responsabilidad objetiva.*

*O lo que es lo mismo, el solo hecho de una acción o una omisión, no conlleva de suyo, de plano, la imposición de las sanciones, pues es preciso entrar a determinar si en el caso concreto, existe un hecho que como caso fortuito o fuerza mayor, excluya la responsabilidad.*

Además, en esos razonamientos debe tenerse en cuenta que opera plenamente el principio de la buena fe, misma que se presume en la Constitución.

Con respeto al primer cargo, es preciso hacer las siguientes precisiones:

El municipio de La Vega Cauca, si cargó y reportó en el SUI los documentos que permitieron determinar que se agotó correctamente el procedimiento establecido en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, respecto del servicio de aseo que presta directamente, toda vez que en fecha 30 de agosto de 2012, tal como se puede probar con las copias de los documentos enviados en esa oportunidad como: las resoluciones de convocatoria y el reporte del cargue al SUI, documentos que se anexan en medio físico en 9 folios.

Respecto a las publicaciones de las invitaciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, el municipio de La Vega Cauca, si realizó las publicaciones a través de la cartelera pública de la Alcaldía Municipal, no se reportó la imagen de los dos folios, debido a que lo que se pretendió fue demostrar que efectivamente se realizó dicha publicación de las convocatorias. Por otro lado, se manifiesta en el acto administrativo descertificador que no es legible el número de la resolución, sin embargo se alcanza a identificar el mes y el año de 2012, de igual forma se realizó el reporte de la imagen de la publicación de la convocatoria del cumplimiento del artículo 6.2 donde también se alcanza a identificar el mes de abril y el año 2012.

Por otra parte, debo manifestar que no existe un procedimiento de cómo se debe realizar la publicación de las invitaciones públicas, pues la ley 142 de 1994 no lo menciona. (Anexo certificación y documento enviado).

Respecto a los cargos 2 y 3 me permito manifestarle lo siguiente:

En cuanto a la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, se verificó que el municipio no reportó el acto de aprobación de tarifas para el servicio de aseo; toda vez que revisado el SUI se estableció que el ente territorial cargó solo hasta el 31 de agosto de 2013, la resolución No 203 del 25 de abril de 2012, por la cual se adopta el estudio de costos y tarifas para el servicio de aseo.

Por consiguiente, en razón a que el inciso 2 del artículo 7° del decreto 1639 de 2013, dispone que los municipios y distritos tenían plazo para reportar la información de los criterios en el SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013, el reporte de este criterio realizado por el municipio de la VEGA, resulta extemporáneo y por lo tanto se da por no cumplido.

En este sentido es necesario manifestar que la información se certificó con fecha 31 de agosto, debido a problemas técnicos de internet, en el municipio de la Vega la señal es muy lenta, y la página no cargaba. Sin embargo se realizó el reporte de la información.

En lo referente al cargo 3, respecto a que el municipio no reportó el porcentaje requerido de los formatos de las tarifas aplicadas y facturación para los servicios de alcantarillado y aseo, para la vigencia de 2012, nos permitimos indicar lo siguiente:

El municipio NO es prestador directo del servicio de alcantarillado, con respecto al porcentaje se realizó el reporte de tarifas aplicadas para los meses de enero y febrero de 2012, debido a que el resto de meses no se encontraban habilitados los formatos y aún siguen sin ser habilitados y con respecto a la extemporaneidad, como se mencionó anteriormente por problemas técnicos del sistema se logró certificar solo hasta el 31 de agosto de 2013. (Anexo evidencia de no habilitación de los formatos).

Con respecto al reporte de la facturación comercial, se realizó el reporte, como se puede observar al diligenciar los datos de envío se realizó el día 30 de agosto de 2012 y se cargó el archivo y quedó en estado de recibido y pendiente de cargue a base de datos, por eso certificó con fecha 01 de septiembre de 2012, además de todos los problemas técnicos de internet, que no permitieron el normal funcionamiento, (anexo evidencia).

(...)

Si lo anterior es jurídicamente así, como en realidad lo es, fuerza concluir, como pasamos a demostrar, que en este caso, si bien existió una demora, o retraso en el envío de la información (1 día), ello obedeció a un caso fortuito que no estando comprometido con un acto de mala fe de la administración, mala fe que dicho sea de paso debe probarse, justifica la omisión de la entidad vigilada, al paso que hace improcedente la imposición de la sanción, y de contera, conlleva la derrumbamiento de la resolución cuestionada.

Además, el estudio de las cosas, debe analizarse saliéndose de las condiciones de la capital de la república, para concentrarse en el contexto del lugar en donde debieron ocurrir los hechos, es decir, para el caso concreto, en el sur caucano Municipio de la Vega Cauca, que no Vega Cundinamarca—, mismo que está a una distancia de no menos de 08 horas de transporte vehicular, desde la capital del departamento, Popayán, desde donde tampoco es posible desplazarse semanalmente, porque la falta de transporte y la presencia a diario de la insurgencia armada, no lo permiten.

Efectivamente, el municipio en varias oportunidades ha manifestado, ha señalado, ha citado como causal excluyente de responsabilidad, un caso fortuito, esto es, el mal funcionamiento de las comunicaciones de internet en ese pequeño pueblo del Cauca.

Lo anterior por aquello tan sencillo de que los sistemas y las comunicaciones no son infalibles, que pueden fallar, y si eso es cierto, pues la ponderación aconseja que no puede la superintendencia cerrar los ojos ante el hecho mencionado, es decir que la plataforma y los sistemas fallaron.

Tanto más, como que los problemas en el caso concreto de esa municipalidad, relativos a las comunicaciones se acrecientan por muchas varias razones tales como i) su ubicación geográfica, que muestra a la cabecera municipal de este municipio enclavado entre las montañas del macizo colombiano, a donde se llega por trocha, luego de más de 08 horas de transporte terrestre, y por tanto, a donde no se encuentra un operador de internet que garantice calidad y alta velocidad; tampoco que haya señal radiada terrestre de algunas empresas que lo ofrecen, al tiempo que la adecuación de la infraestructura para ello necesita de unas fuertes inversiones que un municipio categoría 6 ni de lejos puede asumir; ii) no existe banda ancha ni por tecnología ADSL, celular o cable, y menos por conexión satelital a la red; iii) la compañía COMPARTEL que prestaba el servicio, canceló el mismo desde octubre de 2010; iv) con miras a salirle al paso a esta carencia de conectividad, la alcaldía hace el esfuerzo de morigerarla a través de módems, que es tecnología GSM, es decir, de un estándar de segunda generación, 2G, mismos que permiten una velocidad de navegación irrisoria de 128 kb/s, que como se sabe, es algo así como las épocas más primitivas en materia de navegabilidad por internet; v) los planes que ofrecen los módems son absolutamente limitados, máximo 4 GB de capacidad de navegación mensual, que no alcanzan absolutamente para nada, si se tiene en cuenta que no solo es el servicio de la administración, sino que a esta acuden las demás entidades que hacen presencia en el municipio, léase policía, registraduría, jutas de acción comunal, cabildos indígenas, etc, en procura de solventar alguna posibilidad de comunicación, vi) los módems ofrecen por tanto un servicio totalmente inestable, que impone la repetición de cualquier intento de comunicación o navegabilidad, amén de que varias páginas de entidades del estado bloquean automáticamente sus portales, luego de repetidos intentos.

**Conclusión:** este panorama desolador en materia de comunicaciones de la entidad sancionada, no puede ser desconocido por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, pues si a ello sumamos los problemas de la plataforma de la vigiladora que han sido denunciados; toman sería fuerza como excluyentes de responsabilidad."

### 3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con los documentos radicados con los Nos. SSPD 20145290241172 y 20145290241362 del 13 de mayo de 2014, por medio de los cuales se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Oficio del 9 de mayo de 2014 del encargado del área de sistemas de la Alcaldía de La Vega-Cauca, sobre las dificultades de las comunicaciones presentadas en el municipio y las acciones adelantadas para mejorarlas.

3.3.2. Oficio del 8 de mayo de 2014 del señor Julián Ruizmamián, como Coordinador-Profesional del área ambiental de la Alcaldía Municipal de La Vega-Cauca, donde señala los problemas en la validación de los archivos cargados al SUI el 29 y 30 de agosto de 2013.

3.3.3. Copia de la Resolución No. 188 del 4 de abril de 2014 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA CONVOCATORIA PUBLICA"

3.3.4. Copia de la Resolución No. 136 del 20 de marzo de 2014 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA CONVOCATORIA PUBLICA"

3.3.5. Copia de la Resolución No. 192 del 5 de abril de 2014, "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA"

3.3.6. Copia de la Resolución No. 197A del 21 de abril de 2014, "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA"

3.3.7. Dos imágenes de la publicación en la cartelera municipal de las resoluciones Nos. 136 y 188 de 2012.

3.3.8. Dos páginas del reporte de información al SUI, relacionado con los formatos correspondientes al agotamiento del artículo 6 de la Ley 142 de 1994.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

#### IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

##### 4.1. Argumentos expuestos sobre la inobservancia del proceso administrativo sancionatorio.

Al respecto, la recurrente señala que esta entidad impuso la sanción de descertificación por una omisión del municipio de La Vega, y que además la SSPD no probó la mala fe del municipio, lo que hace improcedente la imposición de la sanción.

De cara a las aseveraciones de la recurrente que el procedimiento que se surte para la certificación en el SGP-APSB, es un procedimiento sancionatorio, esta SSPD le aclara que el proceso de certificación es una actuación administrativa que tiene como fundamento el debido proceso administrativo.

Ahora bien, es preciso señalar que el proceso de certificación es una actuación que se adelanta en estricto cumplimiento de las disposiciones legales teniendo a cada municipio de manera independiente y para cada ente territorial se analizó el cumplimiento de requisitos para efectos de obtener la certificación de la vigencia 2012.

Dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria, por ello, las normas procesales que se deben aplicar al presente proceso de conformidad con el artículo 8° del Decreto 1639 de 2013, son las consagradas en el procedimiento administrativo general y no en el sancionatorio como en forma equivocada se pretende hacer ver.

La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, confiere a las autoridades del sector de servicios públicos la facultad de producir, unilateralmente, actos administrativos particulares y generales; por eso consagra reglas especiales sobre procedimientos administrativos, las cuales están previstas en los artículos 106, 115 y se relacionan con los actos de carácter particular y concreto que las autoridades pueden producir, como lo son las sanciones.

El artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene las funciones de vigilancia, control y sanción de las empresas de servicios públicos domiciliarios; a su vez, el artículo 81 de la misma le consagra las sanciones que puede imponer la SSPD a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Así las cosas, y debido a que la descertificación de los municipios no se encuentra señalada como una sanción de las que pueda imponer esta superintendencia en virtud del ejercicio de la facultad sancionatoria, se aplican las normas del proceso administrativo general y no las del proceso administrativo sancionatorio, se reitera.

##### 4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

Frente a este criterio alega la recurrente que la publicación de las invitaciones realizadas con las resoluciones Nos. 136 y 188 de 2012, por las cuales se declararon abiertas las invitaciones señaladas en los numerales 6.1. y 6.2. del artículo 6° de la Ley 142 de 1994, se realizó en la cartelera municipal, puesto que no existe un procedimiento para realizar dicha publicación, como fundamento de sus afirmaciones allega fotos de las publicaciones de las resoluciones en mención, y menciona que éstos documentos fueron reportados en el SUI y en ellos se puede identificar el número de la Resolución y la fecha de expedición.

Para verificar los planteamientos de la recurrente, este despacho procede a verificar en el SUI el reporte de la información relacionada con la publicación de las Resoluciones Nos. 136 y 188 de 2012, encontrando que el 30 de agosto de 2013 el municipio reportó junto con las Resoluciones 136, 188, 192 y 197A, los siguientes documentos en los formatos "DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN PARA ASEO PREVISTA EN EL ART. 6.1 DE LA LEY 142 DE 1994 (PDF-TIFF)" y "DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA PARA ASEO PREVISTA EN EL ART. 6.2 DE LA LEY 142 DE 1994 (PDF-TIFF)".

Imagen 1:

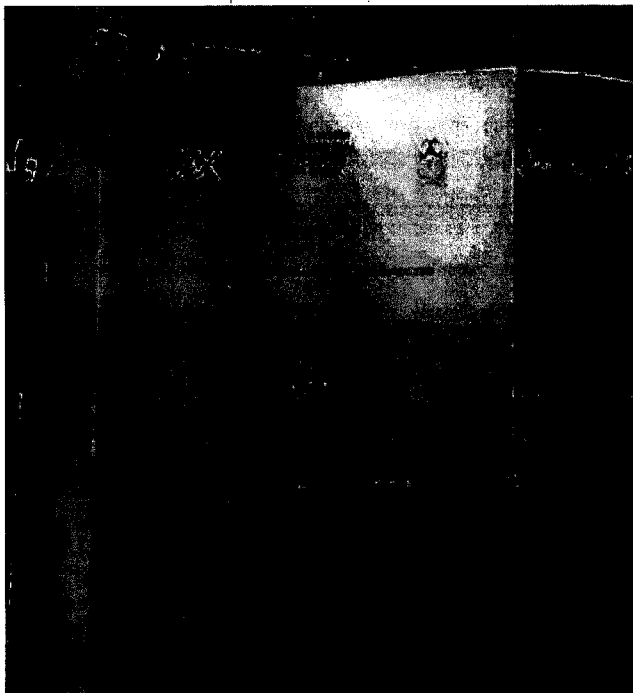
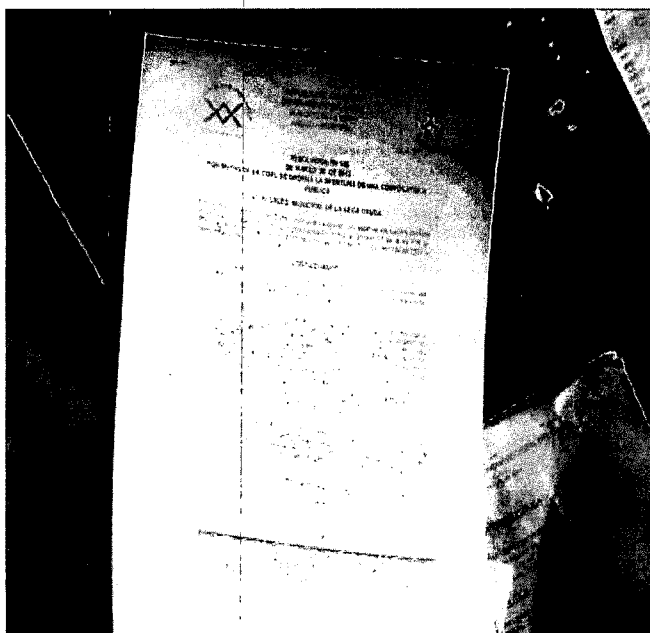


Imagen 2:



A partir de la documentación cargada por el municipio en los formatos del SUI, y de las pruebas remitidas con el recurso de reposición, se puede confirmar que tal como lo señala la recurrente, el municipio de La Vega realizó la publicación de las invitaciones Nos. 136 y 188 de 2012, en la cartelera del municipio, no obstante, lo anterior, se debe mencionar que estas publicaciones no pueden tenerse como válidas puesto que, las mismas debieron realizarse en un medio de amplia circulación o difusión regional como prensa o radio.

Al respecto, es necesario advertir que, de conformidad con el criterio adoptado por esta superintendencia delegada para acueducto, alcantarillado y aseo, la publicación realizada en la página web del municipio carece de valor para efectos de agotar el artículo 6° de la Ley 142 de 1994, por ello esta entidad ha sostenido que: *"Una vez surtidas las invitaciones, éstas deben ser publicadas en un medio de comunicación masivo, por lo menos de alcance regional, puede ser por prensa, para lo cual deberá anexar la página completa del periódico, para comprobar así el nombre del periódico, fecha de publicación y texto de la invitación, si lo hizo por medio de una estación radial, deberá allegar certificación del representante legal de la emisora donde conste la fecha de emisión de la invitación, el texto leído y el alcance de la emisora, ídem en caso de haberlo realizado por un canal de televisión abierta"*.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 8° del Decreto 1639 de 2013, así: *"La SSPD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirán los protocolos para la revisión de la información y de los criterios que a cada uno de ellos corresponde verificar"*.

Sobre el particular se precisa que, si bien es cierto que no existe una reglamentación precisa para el agotamiento del artículo 6° de la Ley 142 de 1994 puesto que se trata de un proceso de invitación pública sui generis, la normativa vigente establece unos principios a los cuales deben someterse las entidades públicas.

Al analizar de manera sistemática el ordenamiento jurídico, se pueden encontrar varios parámetros que orientan la actuación administrativa en el desarrollo de su actuación contractual, como lo son las siguientes disposiciones:

a) La Ley 80 de 1993

*"ARTÍCULO 3° Artículo 3°.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."*

b) La Ley 1150 de 1993

*"Artículo 2°. Selección abreviada*

*Las reglas y procedimientos que deberán atender la administración y los promotores y la publicidad del proceso deberán garantizar la libre concurrencia y oportunidad de quienes participen en el mismo."*

*"Artículo 8°. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos. Con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita formular observaciones a su contenido, las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes, en las condiciones que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuaníme, suficiente y oportuna."*

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido los siguientes principios y parámetros de actuación de las entidades en materia de contratación pública:

*"Es decir, se estaría haciendo referencia al deber de la Administración y al derecho de quienes pretender contratar con el Estado a que: i) la adjudicación de los contratos de realice a la mejor propuesta; ii) el Estado garantice la mayor concurrencia de ofertas; iii) ninguno de los oferentes sufra una discriminación no justificada; iv) todos los participantes tengan el mismo plazo para presentar sus ofertas; v) las mismas se sometan por igual a los términos señalados por la Administración; vi) y el Estado justifique con criterios objetivos cual fue la mejor propuesta; entre otros. (...)*

*El principio de publicidad se manifiesta de dos formas: como deber y como derecho. Por una parte, se trata del deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los administrados la totalidad de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de selección de sus contratistas. (...). Por otra parte, el principio de publicidad adquiere la dimensión de derecho, pues*

quienes estén interesados en contratar con el Estado tienen el derecho a conocer las actuaciones de la Administración. (...)”<sup>1</sup>

A su vez la Corte Constitucional ha desarrollado el tópic de la publicidad de los actos contractuales en los siguientes términos:

*“Uno de los elementos esenciales del debido proceso es el principio de publicidad. Los artículos 209 y 228 de la C.P., lo reconocen también como uno de los fundamentos de la función administrativa. La jurisprudencia ha considerado que este principio no es una mera formalidad, ya que consiste en dar a conocer, a través de publicaciones, comunicaciones o notificaciones, las actuaciones judiciales y administrativas a toda la comunidad, como garantía de transparencia y participación ciudadana, así como a las partes y terceros interesados en un determinado proceso para garantizar sus derechos de contradicción y defensa, a excepción de los casos en los cuales la ley lo prohíba por tratarse de actos sometidos a reserva legal. La realización del principio de publicidad, considerado como un mandato de optimización que “depende de las posibilidades fácticas y jurídicas concurrentes”, compete al Legislador y varía de acuerdo con el tipo de actuación. Así mismo, requiere de las autoridades y de la administración, una labor efectiva y diligente para alcanzar el objetivo de dar a conocer el contenido de sus decisiones a los ciudadanos.*

*(...) En otras palabras, los actos judiciales o de la administración son oponibles a las partes, cuando sean realmente conocidos por las mismas, a través de los mecanismos de notificación que permitan concluir que tal conocimiento se produjo. Adicionalmente, este procedimiento otorga legitimidad a las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales.”*

En virtud de lo anterior las autoridades administrativas tienen la obligación de adelantar los procesos de contratación pública, de tal manera que todos los actos sean debidamente publicados, de tal manera que todos los interesados en participar en el trámite, puedan conocer de manera efectiva la documentación relacionada con las reglas y requisitos para presentar una propuesta que logre satisfacer de la mejor manera posible, las necesidades de la entidad.

La publicación en la cartelera municipal, a diferencia de la comunicación por medios masivos de comunicación como la prensa, radio, televisión o la página web del SECOP, no tiene la incidencia o vocación de informar masivamente la existencia de un trámite contractual para que los interesados puedan concurrir a participar del mismo, por lo cual, la mencionada publicación no goza de las atribuciones que exige la Ley para dar a conocer de manera masiva el contenido de una actuación administrativa.

Por ello, este Despacho no acepta las afirmaciones realizadas por la recurrente y en consecuencia, se tiene como incumplido el criterio en mención.

#### 4.3. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas.

Manifiesta la recurrente que el reporte de la información lo realizó el municipio de La Vega, hasta el 31 de agosto de 2013, por los inconvenientes técnicos que tiene con el internet.

Por lo anterior, este despacho procede a revisar la información contenida en el SUI, encontrando que el formato “ACTO APROBACIÓN DE TARIFAS”, correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008 fue certificado con la opción No aplica; el del año 2009 se encuentra pendiente por certificar, no obstante lo anterior se observó que en el formato “PUBLICACIÓN DE TARIFAS (PDF o TIFF) RES 15085 de 2009” del 2012, el municipio reportó el 31 de agosto de 2013, la Resolución No. 203 del 25 de abril de 2012, así:

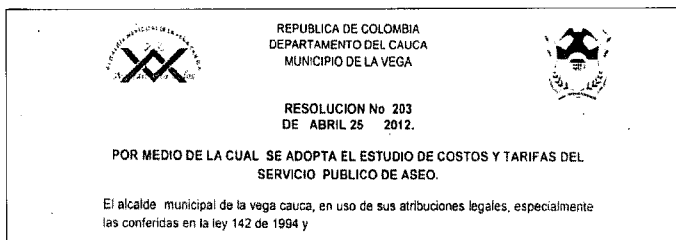
Imagen 3:

MUNICIPIO DE LA VEGA									
CARGUE DE INFORMACION.									
PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO				PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL					
Plan de Carga de Información.				Año	Periodo	Nº Periodo	VER		
				2012	Anual(A)	1			
Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Periodo	Estado	Datos Formatos de envío pccs	Archivos Anexos	Certificar	Fecha Certificación
ACTO APROBACIÓN									
2013- 2013- FACTORES DE									
01-01	01-01	01-01	01-01	2012	Pendiente	p	p	p	p
CONTRIBUCIONES									
ASCO PDF									
PUBLICACIÓN DE									
2013- 2013- TARIFAS (PDF				2012	Certificado	p	p	p	p
01-01	01-01	01-01	01-01	2012	Certificado	p	p	p	p
RES 15085 de 2009									

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”. Sentencia del 29 de agosto de 2013. Radicación 11001-03-26-000-2010-00037-00(39005). Magistrado Ponente JAIME ORLANDO SANTOFIMIO



Imagen 4:



Al respecto esta superintendencia se permite recordar que el Decreto 1639 de 2013, estableció requisitos de carácter formal para acreditar el cumplimiento de los requisitos tendientes a la certificación de los recursos del Sistema General de Participaciones, conforme a lo señalado en el artículo 7° de la citada disposición la información requerida debía ser reportada al SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013.

Pues bien, la anterior es una norma procesal y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, según el cual, *"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley"*.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado así: *"Pues bien, nótese cómo las leyes de estrirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas."*, además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

*"(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."*

Así las cosas, como sucedió en este caso, era indudable que al dejarse vencer el término señalado en el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013 para reportar la información en el SUI, la única decisión viable que podía tomar esta superintendencia consistía en descertificar al municipio de La Vega-Cauca.

Es claro que el municipio de La Vega no reportó en el SUI, dentro del término señalado en el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013, el acto de aprobación de tarifas del servicio de aseo que presta directamente, sin embargo, la recurrente aduce que esto se debió a que tuvo inconvenientes técnicos con el internet, circunstancia que tampoco comparte éste despacho, puesto que, para que éste planteamiento fuera tenido como eximente de responsabilidad, debía enmarcarse dentro de los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, que están definidos por el Artículo 1° de la Ley 95 de 1890, en los siguientes términos: *"Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público"*.

Al respecto el tratadista Arturo Alessandri Rodríguez, en su obra *"De la responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil"*, Páginas 599 y 600, sobre el caso fortuito y la fuerza mayor señala:

*"El caso fortuito o la fuerza mayor supone, (...), un acontecimiento imprevisto e irresistible. Es imprevisto, cuando no hay ninguna razón especial para creer en su realización e irresistible, cuando no es posible evitar sus consecuencias."*

*El hecho debe ser imprevisto e irresistible en sí mismo, es decir, que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar habría podido preverlo. Se requiere una imposibilidad absoluta. Una simple dificultad o una imposibilidad relativa, personal del agente, no basta; la culpa se aprecia en abstracto, Un hecho que hubiera podido prever y evitar con mayor diligencia o a cos-*

*tas de un mayor esfuerzo o sacrificio no es caso fortuito; un hombre prudente lo habría previsto y evitado. Esto es suficiente para privarlo de ese carácter."*

En reiterada jurisprudencia se ha estudiado lo referente al caso fortuito o fuerza mayor, de donde se destaca lo siguiente<sup>3</sup>:

*"Según el verdadero sentido o inteligencia del artículo 1º de la ley 95 de 1890, los elementos integrantes del caso fortuito o fuerza mayor (...), deben ser concurrentes (imprevisibilidad e irresistibilidad) lo cual se traduce en que si el hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal fenómeno, como tampoco se configura a pesar de ser irresistible pudo preverse. De suerte que la ausencia de uno de sus elementos elimina la estructuración de la fuerza mayor o caso fortuito.*

*Si sólo puede calificarse como caso fortuito o fuerza mayor el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible, no resulta propio elaborar un listado de los acontecimientos que constituyen tal fenómeno, ni de los que no lo constituyen. Por tal virtud, ha sostenido la doctrina nacional y foránea que un acontecimiento determinado no puede calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho".*

De la jurisprudencia y la doctrina expuesta, podemos concluir que, en relación con la fuerza mayor o caso fortuito, se debe tener en cuenta:

- a) En cada caso concreto se debe analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho, para determinar si éste constituye o no fuerza mayor o caso fortuito.
- b) Los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser alegados y probados por quien los invoca. Es decir, la carga de la prueba la debe soportar quien invoca tales hechos y no quien debe valorarlos.
- c) Debe tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes; esto es, que su previsión escape en condiciones normales a cualquier sujeto y no a una persona en particular, y que además de no haberse podido prever, sea imposible evitar que el hecho se presente.
- d) No constituyen fuerza mayor o caso fortuito los hechos que acontecen frecuentemente o con cierta periodicidad, ni hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obstáculo dificulta el cumplimiento de una obligación, pero no la imposibilita.
- e) Los hechos no deben ser atribuibles a la culpa, esto es, negligencia, descuido o impericia, de la persona que los invoca.

De acuerdo con lo anterior, se concluye, que para que el argumento de la recurrente sobre inconvenientes con el internet, sea tenido en cuenta como hecho de fuerza mayor o caso fortuito, debió demostrarse la ocurrencia de estos y la proporción en que influyeron para la determinación de una exoneración de responsabilidad por parte del alcalde municipal.

Adicionalmente, el hecho que aduce la recurrente no se configura en hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes, pues es evidente que el mismo no hacía imposible el cumplimiento del criterio en mención. Le recordamos a la recurrente, que el acreditar los requisitos para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, es una obligación que corresponde al ente territorial como tal, y en este sentido, el municipio debió disponer los recursos financieros, humanos, técnicos y administrativos para estar en capacidad de realizar los reportes de información requeridos en la oportunidad debida.

En consecuencia, no es viable jurídicamente, tener como acreditado el cumplimiento del requisito en mención.

#### **4.3. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI.**

Señala la recurrente que sólo reportó en el SUI la información correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, por cuanto los formatos de tarifas aplicadas y facturación de los demás meses del 2012 del servicio de aseo, no se encontraban habilitados, además resalta que los formatos de facturación fueron reportados el 30 de agosto de 2013 en el SUI, pero los mismos quedaron en estado recibido, y por problemas de internet solo pudo certificarlos hasta septiembre de 2013. Explica los inconvenientes en las comunicaciones, los problemas de conectividad y navegación que posee el municipio y solicita tener en cuenta el contexto de la situación del municipio de La Vega cuando se realice el proceso de certificación en mención.

3 Sentencia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil 20 de noviembre de 1989

Para abordar el estudio de este criterio, esta entidad considera oportuno señalar lo que sigue:

El Decreto 1639 de 2013 en su artículo 5°, dispuso como uno de los criterios adicionales que debían cumplir los municipios prestadores directos "a) Cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI".

Si se lee detenidamente el texto del citado criterio, se observa que el legislador estableció que los municipios debían reportar al SUI entre tarifas aplicadas y facturación de los servicios que prestaban directamente los municipios y/o distritos, como mínimo el 30%; es decir, no hizo distinción alguna frente a qué porcentaje de cargue debía realizarse para tarifas aplicadas y qué porcentaje de cargue debía efectuarse para facturación. Dicho porcentaje se obtiene de i) sumar los reportes certificados de ambos ítems (sin discriminar porcentajes entre uno y otro), ii) dividir dicha sumatoria entre la totalidad de los cargues que debía realizar el municipio, y, iii) multiplicar este resultado por 100, con el objeto de establecer si el total arrojado de dicha operación matemática cumple con el porcentaje mínimo exigido en el citado Decreto.

La fórmula es la siguiente:

$$\% = \frac{\text{Formatos certificados}}{\text{Formatos que debía reportar}} \times 100$$

Así las cosas, y con la aclaración de la metodología utilizada para el estudio de este requisito, esta superintendencia pasa a establecer si el municipio de LA VEGA, cargó en el SUI los formatos de facturación y tarifas aplicadas para la vigencia 2012:

Imagen 5:

AÑO	NOMBRE DE LA EMPRESA	SERVICIO	PERIODO	FORMATO	APLICACION	ESTADO	FECHA LIMITE DE REPORTE	FECHA DE CERTIFICACIÓN
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	ABRIL	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Pendiente	2012-07-10 00:00:00	
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	AGOSTO	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Pendiente	2012-11-10 00:00:00	
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	DICIEMBRE	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Certificado	2013-02-10 00:00:00	2013-09-01 22:30:48
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	ENERO	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Pendiente	2012-04-10 00:00:00	
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	ENERO	9. TARIFAS APLICADAS ASEO	Cargue Masivo	Certificado	2012-02-20 00:00:00	2013-08-31 17:41:23
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	FEBRERO	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Pendiente	2012-05-08 00:00:00	
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	FEBRERO	9. TARIFAS APLICADAS ASEO	Cargue Masivo	Certificado	2012-03-20 00:00:00	2013-08-31 17:09:42
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	JUNIO	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Pendiente	2012-10-10 00:00:00	
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	JUNIO	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Pendiente	2012-06-10 00:00:00	
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	MARZO	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Pendiente	2012-06-10 00:00:00	
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	MAYO	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Pendiente	2012-08-10 00:00:00	
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	NOVIEMBRE	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Certificado	2013-02-10 00:00:00	2013-09-01 22:30:21
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	OCTUBRE	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Certificado	2013-01-01 00:00:00	2013-09-01 22:39:56
2012	MUNICIPIO DE LA VEGA	ASEO	SEPTIEMBRE	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	Cargue Masivo	Certificado	2012-12-10 00:00:00	2014-05-01 13:26:49

Como puede observarse de los reportes que arroja el SUI, el municipio de LA VEGA cargó extemporáneamente cuatro formatos de facturación y dos de tarifas aplicadas, en razón a que siendo la fecha máxima de cargue el 30 de agosto de 2013, el municipio reportó dichos formatos el 31 de agosto de 2013 y el 1 de septiembre de 2014.

Al respecto, esta superintendencia se permite reiterar que el Decreto 1639 de 2013, estableció requisitos de carácter formal para acreditar el cumplimiento de los criterios tendientes a la certificación de los recursos del Sistema General de Participaciones; así las cosas, conforme a lo señalado en el artículo 7° de la citada disposición, la información requerida debía ser reportada al SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013.

En cuanto al reporte de facturación de la vigencia 2012, el ente territorial recurrente no tenía reportado en el SUI a 30 de agosto de 2013, ninguno de los formatos que debía cargar como municipio prestador directo del servicio de aseo a 31 de diciembre de 2012.

Ahora bien, tal como lo afirma la recurrente, el municipio solo tenía habilitados dos formatos de tarifas aplicadas para el 2012; sin embargo no se encontró solicitud de habilitación a través de mesa de ayuda del SUI o de oficio enviado a esta superintendencia, con el cual el alcalde municipal de La Vega expusiera dicha circunstancia y realizara los trámites establecidos para obtener la habilitación de los formatos faltantes del SUI.

Al respecto, es necesario aclararle a la recurrente que el trámite de habilitación de los formatos y formularios en el SUI, debe observar lo establecido en la Resolución No. SSPD 20131300008055 del 1 de abril de 2013, así:

**"ARTÍCULO 18. Modificar el inciso 3o de los artículos 19.1.2.1 y 19.2.2, los cuales quedarán así:**

*Los que requieran deshabilitar formatos y/o formularios que según la normatividad no les corresponda reportar al SUI, deberán presentar ante el Coordinador del Grupo SUI de la Superintendencia, una solicitud escrita firmada por el representante legal del prestador, alcaldía, gobernación, corporación autónoma regional y/o gestor del Plan Departamental de Aguas. La petición deberá describir en forma clara y precisa cuáles van a ser los formatos y/o formularios a deshabilitar, así como su periodicidad, periodo, año y servicio, y las causas que sustentan dicha petición.*

*Los que requieran la habilitación de formatos y/o formularios que según la normatividad les corresponda reportar al SUI, deberán presentar ante el Coordinador del Grupo SUI de la Superintendencia, una solicitud escrita a través de cualquiera de los siguientes medios: vía mesa de ayuda con usuario y contraseña SUI, correo electrónico oficial del solicitante u oficio firmado por el representante legal del prestador, alcaldía, gobernación, corporación autónoma regional y/o gestor del Plan Departamental de Aguas. La petición deberá describir en forma clara y precisa cuáles van a ser los formatos y/o formularios a habilitar, así como su periodicidad, periodo, año y servicio.*

**ARTÍCULO 19. Modificar los artículos 19.1.2.2 y 19.2.2.2, los cuales quedarán así:**

*Si la solicitud de habilitación o deshabilitación cumple con los requisitos establecidos en el artículo anterior, el Grupo SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud. Para decidir se verificarán los motivos y causas expuestos por el solicitante."*

De esta manera se demuestra que el municipio debía tener claro el procedimiento que debía seguir para que le fueran habilitados los formatos en el SUI, para lo cual contaba con más de ocho meses del año 2013.

Con fundamento en lo señalado en precedencia, esta superintendencia entra a calcular el porcentaje de cargue al SUI realizado por el municipio de LA VEGA, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1639 de 2012, para tarifas aplicadas y la facturación:

$$\% = \frac{0 \text{ (formatos cargados de tarifas aplicadas y facturación en término)}}{24 \text{ (formatos que debía cargar por aseo de facturación y tarifas aplicadas)}} \times 100 = 0\%$$

En gracia de discusión, esta superintendencia entra a demostrar que en el caso en que se tuvieran los argumentos de la recurrente como válidos, tampoco sería viable tener como acreditado éste criterio, por cuanto el municipio i) no adelantó ninguna gestión ante esta superintendencia para que fueran habilitados los formatos del SUI y, ii) no reportó antes del 30 de agosto de 2013 los formatos de tarifas aplicadas y facturación que tenía habilitados, sin embargo realizada la anterior fórmula con los formatos del SUI que tiene habilitados (imagen 5) en el SUI, el resultado sería el siguiente:

$$\% = \frac{0 \text{ (formatos cargados de tarifas aplicadas y facturación en término)}}{14 \text{ (formatos habilitados por aseo de facturación y tarifas aplicadas)}} \times 100 = 0\%$$

En este orden de ideas, el porcentaje de cargue al SUI de tarifas aplicadas y la facturación para el SGP-APBS, vigencia 2012 por parte del ente municipal fue del 0%, el cual no alcanzaba el mínimo requerido por el Decreto 1639 de 2013 del 30%.

Adicionalmente, sobre los planteamientos relacionados con los problemas de comunicación, tecnológicos y de ubicación geográfica del municipio de La Vega, no se considera procedente tenerlos en cuenta como eximentes de responsabilidad de la presentes obligaciones legales, lo anterior debido a que todas las situaciones mencionadas pudieron haber sido previstas oportunamente por la administración municipal quien conocía de antemano la normatividad que regula el proceso de certificación y por ende los términos para el cumplimiento de los requisitos. Adicionalmente, sobre la no habilitación de los formatos, nunca se dijo nada a esta superintendencia quien a través del centro de soporte SUI, hubiese podido apoyar al Ente Territorial con las dificultades presentadas y de esta manera poder otorgarle al municipio la posibilidad de efectuar el cargue de la respectiva información.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento de los criterios que se le demandan, por lo tanto el recurso formulado por la señora MARLENY VALVERDE MOPAN, como apoderada del alcalde municipal de LA VEGA, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD 20144010010575, del 7 de abril de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de LA VEGA, del departamento del CAUCA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento del CAUCA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO**

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Visto Bueno: Martha Lucía Durán - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094011982480428A